

La educación en debate #59

Suplemento

abril
2018Universidad
Pedagógica
Nacional

Nuevas formas de privatizar las aulas

por Leandro Bottinelli*

Como todo término que participa de la comunicación, la palabra privatización admite más de un significado. Para la historia reciente (o no tanto) de nuestro país, connota la transferencia de empresas públicas desde la órbita estatal a la privada lucrativa. La ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) devenida en las compañías Telefónica y Telecom, o YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), empresa estatal transferida a la española Repsol, son algunos de esos casos emblemáticos ocurridos en la primera mitad de la década del noventa que representan en nuestro imaginario qué es un proceso de privatización (en particular, para aquellos que tenemos más de cuarenta años de edad).

En educación, el término privatización tiene una variedad de significados posibles. Privatizar la enseñanza puede ser, por supuesto, traspasar la propiedad y/o la gestión de una escuela estatal hacia un particular (con o sin fines de lucro), aunque no es este el modo en que se desarrollaron históricamente las escuelas privadas en Argentina. La creación de iniciativas particulares o privadas de enseñanza es de antigua data en nuestro país y se vincula a la gravitación de la Iglesia Católica y a la creación de colegios asociados con distintas colectividades. El impulso dado a la creación de escuelas públicas por las provincias y el Estado nacional desde las últimas décadas del siglo XIX no detuvo el proceso de creación de escuelas privadas pero comenzó a modificar de modo sustancial la participación de ambos sectores en la provisión de servicios educativos: entre 1900 y 1950 la participación de escuelas privadas de nivel primario descendió 20 puntos, desde 27% a 7%. A partir de mediados de siglo XX, esta tendencia comenzó a revertirse, ganando parti-

cipación relativa las escuelas y la matrícula privada: en la actualidad, el 17% de las escuelas primarias son privadas y a ellas asiste el 27% de los alumnos. Un aspecto clave para explicar la expansión histórica de la educación privada desde el lado de la oferta no fue tanto el reconocimiento oficial (estatal) de sus planes de estudio o de los títulos como la posibilidad de contar con subvenciones regulares (la normativa vigente los denomina aportes) para que las instituciones pudieran sufragar los costos salariales del servicio educativo, evitando volcar completamente ese esfuerzo en las familias de sus alumnos. El último dato disponible indica que el 70% de las escuelas privadas cuenta con subvenciones: la mitad de ellas recibe aportes para sufragar la totalidad de los sueldos de sus docentes, mientras que el resto percibe aportes parciales para este mismo fin.

La existencia de escuelas privadas con reconocimiento oficial y la asignación de subvenciones públicas para su desarrollo son, probablemente, los dos componentes centrales de lo que podríamos denominar la discusión tradicional sobre el carácter público-privado de la educación en Argentina. Frente a estos componentes, es necesario postular el desarrollo más reciente de otros novedosos que van en el sentido de la privatización de la educación y que resulta importante identificar, describir y visibilizar para que pasen a formar parte del debate sobre el carácter público-privado de la educación en Argentina.

Management escolar

Como parte de la revolución neoconservadora referenciada en las figuras de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, algunos países impulsaron en la década del ochenta un proceso de reforma del Estado guiado por criterios de austeridad

económica y ajuste fiscal. En el sector público, se impulsó un plan de reformas de su estructura y procesos basado en la introducción de lógicas de la administración empresarial (enfoque de la Nueva Gestión Pública, NGP). El sistema educativo, una de las estructuras más voluminosas de la administración pública, también estuvo y está atravesado por propuestas de reformas que apuestan a introducir herramientas y criterios de la NGP. El abanico de propuestas sostenido en este enfoque es variable y su traducción a casos nacionales nunca es unívoca. Sin embargo, estas propuestas suelen incluir iniciativas de ampliación de la autonomía escolar; la rendición de cuentas de las escuelas (accountability); la gestión basada en resultados estandarizados y cuantificables; la competencia entre escuelas para atraer alumnos, y la remuneración variable de los docentes de acuerdo al desempeño de sus alumnos.

Como se señaló, el enfoque de la Nueva Gestión Pública impulsado en el sector educativo no es una propuesta monolítica y sus aplicaciones concretas no implican necesariamente una mercantilización o privatización de la educación. Por ejemplo, bajo la etiqueta de la autonomía escolar, pueden promoverse iniciativas que habiliten a las escuelas para definir un proyecto educativo propio vinculado con las particularidades de la comunidad en la que trabaja, una iniciativa que puede ir dirigida a reconocer las diferencias en la enseñanza y a garantizar el derecho a la educación. Por el contrario, bajo la misma consigna de la autonomía, puede pretenderse que los directores de las escuelas se conviertan en gerentes con capacidad para contratar y despedir docentes o para recaudar fondos, lo que bien podría ser concebido como un movimiento hacia la privatización de la educación (1).

Medir para la competencia

La gestión por resultados es otro de los tópicos clave de la NGP. En el sector educativo, la principal traducción de esos resultados son los desempeños de los estudiantes medidos a partir de pruebas estandarizadas externas a la escuela en dos o tres materias. Desde la década de los ochenta, se fueron extendiendo evaluaciones estandarizadas oficiales de alumnos que son diseñadas y administradas por los gobiernos o por agencias internacionales de modo externo a las escuelas. Argentina comenzó a realizar este tipo de pruebas en 1993 y sigue haciéndolo hasta el presente aunque con frecuencia y modalidades variables.

Un modo particular de desarrollo de este tipo de evaluaciones consiste en transformarlas en un sistema público de rendición de cuentas de cada escuela, bajo el supuesto de que la difusión de los puntajes que obtiene cada institución en las evaluaciones operará como una presión hacia la mejora. Se asume que esa presión exógena es la palanca clave de la mejora de la educación, introduciendo una lógica de competencia similar a la que existe entre las empresas en un mercado, aspecto que fundamenta también la necesidad de ampliar la autonomía de las escuelas para que tomen decisiones, no sólo sobre su proyecto pedagógico institucional, sino también sobre otros, como la contratación de personal o componentes de las remuneraciones.

El afán por medir y comparar las escuelas entre sí deriva en el fervor por la elaboración, difusión y consumo de rankings educativos, sea de países, universidades o escuelas, como barómetro para saber cuál es la situación de la educación. También pueden ofrecerse premios en dinero a las escuelas que mejoren sus resultados entre mediciones (bajo la excusa de financiar proyectos) o bonos salariales a los maestros de los mejores alumnos, como estímulos externos para la mejora. Para que esta lógica mercantil pueda funcionar, es necesario que las evaluaciones de las escuelas tengan un carácter censal, es decir, que participen todas las escuelas del país, ya que los tradicionales operativos por muestreo de escuelas (más eficientes y prácticos para producir conocimiento sobre la educación) no permiten asignar un puntaje a todos y cada uno de los establecimientos (2). También es importante que la evaluación sea muy frecuente (anual en lo posible) para ofrecer señales regulares sobre la calidad de cada escuela a los consumidores de educación; del mismo modo que los precios, la in-



Janet Grant, Desplegadas, 1963

d formación técnica de un producto o la publicidad lo hacen en los mercados. Este modelo de evaluación estandarizada de alumnos, de carácter censal y anual, en el que se insta a las autoridades escolares a difundir y promocionar los puntajes que sus alumnos obtienen en las pruebas, es el que se viene desarrollando en Argentina desde el año 2016 a través de la evaluación Aprender (3). Más allá de ello, las evaluaciones estandarizadas son un insumo importante, entre otros fines, para la producción de conocimiento sobre la situación y la evolución de la educación en un país o en una provincia. Desafortunadamente, crece la tendencia a utilizarlas como un sistema de información para consumidores, mercantilizando así la educación, en lugar de desarrollarlas para promover una discusión pública informada sobre la educación y generar conocimiento útil para la formulación e implementación de políticas educativas.

Empresarios por la escuela

El sector productivo estuvo siempre ligado al ámbito educativo, tanto en la educación técnico-profesional como en diversos espacios de las políticas educativas. Los modos de esa relación han sido variables según las características del contexto histórico y el ciclo político, pero la vocación del sector empresarial ha sido la de buscar que los planes de estudio –en particular de los últimos años del nivel medio, del nivel superior, de la educación de adultos y técnico-profesional– ofrezcan conocimientos y habilidades acordes con lo que perciben como necesidades propias de sus recursos humanos. La creación del CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica) a fines de los cincuenta (antecesor del actual INET, Instituto Nacional de Educación Técnica) o el desarrollo de los CENS (Centros Educativos de Nivel Secundario) desde la década del setenta son dos posibles ejemplos del modo en que el sistema educativo tramita las demandas de sectores de la producción para desarrollar una oferta formativa sintonizada con la necesidad de cualificaciones laborales.

A esta demanda tradicional de sectores del empresariado, se ha sumado una propuesta de nuevo tipo en los últimos años que ya no es presentada como demanda de uno de sus actores sino como aspiración de toda la sociedad. Así, bajo denominaciones con vocación universal tales como “los argentinos”, “todos los ciudadanos” o “por la educación”, estos proyectos emanados desde sectores concentrados del empresariado apuestan a incidir en las políticas educativas para enfocar la escuela hacia el desarrollo de competencias para el mercado global. Buscan legitimar sus iniciativas publicitándolas como plurales, aun cuando sean el producto de algunas empresas concentradas y trasnacionalizadas. Sus discursos públicos toman distancia de los clásicos enunciados abiertamente mercantiles, característicos de la década del noventa, para apelar a una batería de términos que eviten ominosas connotaciones comerciales. En este sentido, los discursos utilizan el término aprendizajes en lugar de competencias para el mercado global; calidad de la educación, en vez de mediciones estandarizadas de desempeño; sociedad civil como forma genérica para nombrar a las grandes empresas y sus fundaciones; redes, para mentar la influencia de las corporaciones de negocios en las políticas educativas; o innovación, concepto utilizado en lugar de reforma gerencial de la educación. A nivel regional, parte de estas iniciativas se nuclean en la Reduca (Red Latinoamericana por la Educación), una suerte de Consenso de Washington educativo del siglo XXI, cuyo representante en Argentina es la Fundación Educar 2050, una de las pocas instituciones de esa red regional que no asume en su denominación el uso del término empresarios. Otra iniciativa vinculada a esta red, y que ya cuenta con algunos años operando en la CABA y en Jujuy, es Enseñá por Argentina, una filial local de la ONG norteamericana Teach for America que implementa un programa en el que un codocente participa en la enseñanza en las aulas junto al docente del grado, luego de recibir una breve capacitación de apenas un par de meses.

Este proyecto apuesta a transformar una profesión con regulaciones y tradiciones pedagógicas muy fuertes, para convertirla en una ocupación flexible, desregulada e impregnada del espíritu del hombre de éxito en los negocios.

La investigadora en políticas educativas Erika Moreira Martins ha estudiado en profundidad en su tesis de maestría del año 2013 el proyecto hegemónico que el gran empresariado brasileño impulsa para la educación en su país bajo el rótulo “Todos por la educación”, poniendo en evidencia los deslizamientos privatizadores de esa iniciativa. La especialista señala que el proyecto oculta los límites entre lo público y lo privado en la educación, para desdibujar la distinción entre derechos sociales y derechos individuales. En Argentina, contamos también con algunas contribuciones que exploran la injerencia reciente de los intereses del empresariado más concentrado en la educación, señalando la creciente influencia de las grandes consultoras encargadas de los operativos de evaluación, la tercerización de actividades clave del gobierno de la educación como la difusión de las estadísticas educativas o los cambios en los contenidos de enseñanza sobre contaminación ambiental, impulsados por las empresas mineras (4) y (5).

¿Bien común o bien de mercado?

Un último componente que cabe mencionar entre las tendencias novedosas de privatización es la transformación del sector educativo en una arena para el desarrollo de ganancias empresariales a partir de la cuantiosa masa de recursos públicos conformada por ese 4% a 6% del Producto Interno Bruto que los países invierten en educación. Más allá del tradicional negocio editorial con los manuales escolares o de la venta de bienes necesarios para el funcionamiento de las escuelas (mobiliario, útiles escolares, alimentos para comedores), existe hoy una proliferación de servicios privados de gran escala cuya lógica termina por predominar sobre la educativa, avanzando en un proceso que se denomina mercantilización de la edu-

cación (y que tiene una especificidad mayor que el término privatización. Grandes consultoras internacionales como Pearson Educación S.A. o el Grupo Positivo de Brasil ofrecen a los Estados (nacionales o subnacionales) servicios que van desde el diseño de los contenidos de enseñanza, el reclutamiento y la formación de docentes o la realización de evaluaciones estandarizadas, ofreciendo a los gobiernos una cadena de servicios que termina por conformar algo así como un sistema educativo llave en mano. Esta masiva tercerización (outsourcing) de la educación suele ser justificada por sus defensores alegando que la regulación la sigue teniendo el Estado y que los privados sólo ejecutan la producción de ciertos servicios. Sin embargo, la injerencia de estos particulares comienza a cobrar una dimensión tal en algunos países o provincias que pone en duda incluso el carácter público del gobierno de la enseñanza. ■

1. Antoni Verger y Romuald Normand (2015), Nueva Gestión Pública y educación: elementos teóricos y conceptuales para el estudio de un modelo de reforma educativa global, Campinas, Educação & Sociedade, 2015.
2. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, “Enseñar para la prueba no es lo mismo que educar”, entrevista realizada al investigador brasileño Luiz Carlos de Freitas, 2016. Disponible en <http://v2.campañaderechoeducacion.org/noticias/580-entrevista-ensenar-para-la-prueba-no-es-lo-mismo-que-educar.html>
3. Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, El derecho a la educación en Argentina. ¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?, Buenos Aires, CADE, 2017.
4. Miguel Duhalde y Myriam Feldfeber (coords.), Tendencias privatizadoras de y en la educación argentina, Buenos Aires, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), 2016.
5. Martín Becerra, “Entre la ‘agencia de evaluación’ y la ‘gerencia de recursos humanos’: El perfil del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación durante la gestión de Esteban Bullrich (2015-2017)”, en Informe de Investigación N° 4, Buenos Aires, Observatorio de las Elites, Universidad Nacional de San Martín, 2017.

*Observatorio Educativo de la UNIPE.

ALBERTO CROCE, SECRETARIO DE CADE

Más tecnologías, menos docentes

por Diego Herrera*

La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) es una coalición nacional, creada en 2006, que articula los esfuerzos de distintas organizaciones sociales en defensa de los derechos educativos y la promoción de la Justicia Social Educativa. En el ámbito internacional es miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y de la Campaña Mundial por la Educación (CME). Alberto Croce, educador y secretario de la CADE, reflexiona sobre las nuevas formas de privatización y de mercantilización de la educación.

Croce comparte con varios sindicatos y organizaciones sociales la preocupación por las nuevas formas de privatización y de mercantilización de la educación que avanzan en muchos países del mundo. "Surgen cosas novedosas que hacen que estemos alertas —observa—. Por ejemplo, a nivel internacional hay una movida muy fuerte para promover escuelas de bajo costo, sobre todo en los países pobres o muy pobres. La cooperación internacional no les da dinero a estas instituciones, sino proyectos educativos armados desde el Norte por empresas privadas, como Pearson. Estos proyectos se pueden dar 'gratuitamente' o a cargo de deuda externa." De acuerdo con el educador, este tipo de escuelas pone a las nuevas tecnologías en un lugar preponderante y relega a los docentes a un lugar secundario. "A nosotros todavía no nos llegan estos modelos, pero pueden llegar cosas parecidas en cualquier momento", advierte.

Según el secretario de la CADE, en Argentina se ha fortalecido un discurso ligado a nuevas lógicas educativas que enfatiza que se viven nuevos tiempos y responsabiliza a los estudiantes por sus propios aprendizajes. "Indirectamente, se desvaloriza el lugar de la enseñanza que pueden tener los docentes", analiza Croce. De esta manera, bastaría con el apoyo de algunos recursos tecnológicos para que el estudiante pueda aprender: "Esa tecnología y esos recursos pueden venir dados por internet. Entonces, se vuelven muy caros los docentes. Se genera todo un discurso que al final termina en un sistema privatizado". Como en casi todos los países del mundo el presupuesto educativo sigue siendo de los más elevados del sector público, las empresas encuentran allí un negocio muy rentable.

En el caso específico de Argentina, Croce sostiene que muchas escuelas privadas fundadas por familias argentinas están siendo compradas por grandes empresas: "Los fundadores se van muriendo y vienen empresas extranjeras que dicen traer nueva tecnología e inspiraciones de pedagogías

americanas o europeas. De esta manera, se termina armando una escuela privada que ya no tiene la misma orientación de la primera". De acuerdo con el educador, se trata de una tendencia muy riesgosa: "Se instala un discurso negativo sobre la escuela pública y también sobre otras escuelas privadas; se dice que son viejas, que ahí no se aprende nada".

Además, las evaluaciones externas y estandarizadas constituirían, de acuerdo con Croce, otro mecanismo de privatización actual y pujante. "Se genera una marca de evaluación internacional y esa marca es vendida a las escuelas que quieren mostrar que están mejor que las otras. Después, las empresas también venden la capacitación y los cuadernillos para preparar docentes y estudiantes que participan de esas pruebas", dice. Y agrega: "Los combos vienen completos y las escuelas privadas los compran porque se supone que haber conseguido una de estas certificaciones les da prestigio y la posibilidad de cobrar cuotas más altas".

Como secretario de la CADE, Croce participa del Consejo Federal de Educación (CFE). "En ese espacio —revela—, me toca representar a las organizaciones sociales que están cercanas a nuestras posturas. Hay otras personas que están por otras organizaciones que tienen otras miradas." Así, una primera vía de influencia de asociaciones privadas en las políticas educativas estaría vehiculizada a través de la participación en el mismo CFE.

La CADE también lleva adelante iniciativas en espacios menos formales de la educación. Defiende, por ejemplo, el sostenimiento de los bachilleratos populares y está comprometida con la fundación de escuelas de gestión social. Otra de sus preocupaciones consiste en la mejora del financiamiento educativo: "Junto con organizaciones que no necesariamente tienen la misma mirada, coincidimos en la necesidad de que haya una nueva ley de financiamiento educativo", sostiene Croce. "Una nueva normativa o un mecanismo similar es fundamental —argumenta—, porque es necesario un acuerdo nacional sobre cómo se destinan los recursos para educación y cómo se protegen, sobre todo en estos tiempos en los que va a empezar a haber tantas presiones con el pago de intereses de deuda externa. La ley anterior preservaba los recursos para educación, pero eso tiene que volver a ponerse en discusión porque se corre el riesgo de que bajo mil pretextos se terminen bajando los presupuestos educativos y, en consecuencia, se deteriore la calidad de la educación." ■

*Licenciado en Ciencias de la Comunicación e integrante del equipo editorial de UNIFE.

LAURA MARRONE,
LEGISLADORA

La penetración mercantil en el Estado

Así como al frente del Ministerio de Energía hay un CEO de la Shell, en el área de Educación vemos CEO de empresas educativas. El ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, fundó EduNexo, empresa de software educativo, y Kuepa, plataforma digital para la educación de adultos. Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Nación hasta fines de 2017, es presidente de la empresa offshore Formar Foundation", denuncia Laura Marrone, integrante de la bancada por el FIT de la Legislatura porteña y docente durante más de 30 años.

Siempre se asoció la privatización de la educación con el modelo de subsidios del Estado a las escuelas de gestión privada. ¿En qué situación está Argentina con respecto a esto? El crecimiento de la educación privada en Argentina, en las últimas décadas, es pronunciado. En la Ciudad de Buenos Aires, la matrícula privada es el 51% del total; en la Provincia, que constituye casi el 37% del sistema educativo nacional, representaba el 45,5% en 2015. Ciudad y Provincia estarían llegando a un tope, pero en otras provincias la educación privada está en plena expansión y esto se observa en la matrícula de los primeros años de la primaria.

¿Existen nuevas formas de mercantilización de la educación?

La privatización exógena es más conocida: el sistema educativo ha generado un sistema paralelo que hoy representa el 30% del sistema educativo nacional. Otra forma de privatización más reciente es la endógena, es decir, la penetración de lo privado en las escuelas estatales. Las empresas que la ejercen y los Estados que la promueven tienen como objetivo, primero, el beneficio comercial de quienes venden servicios educativos. Existen empresas de asesoramiento docente a familias, de capacitación a docentes, de evaluación a gobiernos, y las que brindan personal temporario a las escuelas.

¿Con personal temporario se refiere a empleados de seguridad, mantenimiento y comedores escolares?

Los servicios no profesionales, con algunas excepciones, fueron privatizados en la década del 90. Ahora vienen por los servicios de los profesionales docentes. En ese sentido, el PRO en la Ciudad fue vanguardia.

¿Qué casos de privatización endógena ha detectado?

En la Capital, hay más de 70 Centros de Primera Infancia (CPI), que son lugares donde no se configura un espacio educativo sino de contención social. Los CPI se entregan a ONG o asociaciones civiles que reciben un subsidio del Estado de acuerdo con la matrícula. Estas ONG, que son muchas, firman convenios con el Estado y llevan a la precari-

zación laboral de los trabajadores y a la precarización educativa de los niños. En la Ciudad, para el 2018, el presupuesto de educación se redujo en un 8,1%. Al mismo tiempo, crece el presupuesto de Desarrollo Social, que es el que toma a su cargo los convenios con ONG y fundaciones.

¿Hay auspicios de grandes empresas detrás de estas ONG?

En los CPI no tanto. Eso sucede más en las fundaciones. Está el caso de Enseñá por Argentina, que está generando, a través de las escuelas de jornada extendida, una especie de agencia de empleo. Se intenta desarrollar una extensión de la jornada escolar con docentes que no están dentro del estatuto, o incluso que no son docentes, y que son preseleccionados por estas fundaciones.

¿En la Ciudad se empieza a extender la jornada escolar en las primarias estatales y para cubrir esas nuevas horas Enseñá por Argentina selecciona docentes?

Empieza a cubrirlo con personal que ha sido filtrado previamente por esta agencia. Otro ejemplo es BisBlick, una fundación que entrega becas a los estudiantes y está mencionada en la página del Ministerio de Educación de la Nación. En Capital, además, tenemos la presencia creciente de universidades privadas para la capacitación docente en el espacio público-estatal. Es el caso de la Universidad de San Andrés. Hay otras fundaciones ligadas con el Estado: la Fundación de Estudiantes Internacionales Eidos, contratada para dar cursos de fortalecimiento de talentos; Educación 137, a cargo del diseño del Plan Maestro y el Plan Minerva de reforma universitaria; Educar 2050, impulsada por el Banco Mundial, Santander, Telefónica, Ledesma, Despegar.com, y Muy Bien 10, a través de la cual la Provincia de Buenos Aires terceriza la capacitación docente. No está transparentado cuál es el vínculo y compromiso que el Estado nacional tiene con estas fundaciones ni cuánto dinero reciben.

¿Qué lugar ocupan las evaluaciones externas en estos nuevos procesos de privatización?

El caso PISA es el más notable: la empresa multinacional Pearson tiene la franquicia a nivel internacional en casi 60 países. Los Estados pagan por las pruebas PISA y Pearson gana millones de dólares.

¿Cómo inciden las grandes empresas en el delineamiento de diseños de políticas educativas?

Además de hacer sus negocios y de conseguir exenciones impositivas, buscan el control ideológico. Hay una privatización del conocimiento: quieren controlar la cabeza y el pizarrón del docente. Desde la caída de la dictadura, hay una camada de docentes que ha tomado su tiza para hacer entrar al aula de forma crítica la realidad política y social. La privatización del conocimiento significa que el docente ya no sea el que elige su bibliografía y recorta su enfoque, sino que se transforma en un facilitador que aplica plataformas digitales previamente diseñadas por empresas extranjeras. En la página del Ministerio de Educación de la Nación empiezan a aparecer plataformas digitales para su uso no obligatorio en el aula. Todo hace pensar que a medida que el proceso de control del aula a través de la evaluación externa se profundice, esto empezará a ser obligatorio. ■

D.H.

MIGUEL DUHALDE, GREMIALISTA

Vía libre para el gerenciamiento

Secretario de Cultura de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y secretario de Educación de CTERA, Miguel Duhalde coordinó el libro *Tendencias privatizadoras "de" y "en" la educación que el mayor gremio nacional docente publicó en diciembre de 2016. El sindicalista –que también es docente del Instituto Superior de Profesorado N° 3 "E. Lafferriere" de Villa Constitución y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos– afirma: "Las empresas están teniendo vía libre para avanzar en la imposición del gerenciamiento y el vínculo con el sector privado".*

¿Existen nuevas formas de privatización de la educación?

Sí, y desde CTERA las estamos estudiando. Ahora nos focalizamos en la tendencia endógena de la privatización, que se manifiesta a través de convenios que el Estado firma con ONG, fundaciones y empresas privadas. Siempre existieron, pero a partir de la llegada al poder de la alianza Cambiemos encuentran campo fértil para avanzar. Estos acuerdos se dan a nivel general y parecen ser la política que despliega el Gobierno, junto con la evaluación externa.

¿Qué casos específicos han detectado?

Hay convenios que se firman a nivel nacional, pero para la concreción de cada uno de los programas se necesita de las provincias. Hay avances importantes en Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Jujuy, Mendoza y Corrientes. También en provincias donde el oficialismo no gobierna pero tiene alianzas muy fuertes, como los casos de Córdoba y Salta. Los programas que se impulsan están incluidos en el marco de una idea de gerenciamiento del espacio público.

¿Cuáles son las entidades con las que el Estado firma esos convenios?

Una de las principales es Enseñá por Argentina. Tiene alrededor de 40 socios corporativos y a la vez hace alianzas con universidades privadas, como la de San Andrés, del Salvador y la Católica. Es uno de los casos más renombrados y tiene como objetivo la formación de jóvenes profesionales que después parti-

cipan como codocentes en los procesos educativos. Es una figura que no es docente y cobra mucho menos.

¿Qué otras entidades firmaron convenios con el Estado?

Otro caso es el de la Fundación Varkey, una ONG que también funciona a nivel mundial y da un premio global de un millón de dólares para un "docente excepcional". Acá en Argentina se recrea con el premio de un millón de pesos para proyectos e iniciativas innovadoras. Educar 2050 busca incidir directamente en las políticas públicas y lo dice en su propia página. Su misión es formar en liderazgo a los directivos de las escuelas y también tiene el apoyo de grandes empresas. Otra organización que este Gobierno ha habilitado para que tenga injerencia en la decisión de las políticas públicas es Cimientos. Es larga la lista.

¿Cómo afecta ese modelo gerencial a la representación gremial de los docentes?

Nosotros cuestionamos la importación de modelos de la gestión y administración del sector empresarial a las escuelas. El Gobierno considera a los actores educativos como sujetos con intereses individuales, preocupados por el liderazgo y la innovación por la innovación misma. Se hacen fuertes las ideas de emprendedurismo, meritocracia y la rendición de cuentas. Todo ese modelo habilita un sistema educativo que puede ser medido y evaluado de acuerdo con criterios de productividad. Bajo esta concepción, la escuela parece una empresa que produce y que va a ser medida por los resultados. Así, se inhabilitan otras formas de organización y conducción, que son las que promovemos desde el sindicato. Nuestra idea tiene más que ver con un espíritu colaborativo y solidario, con la comunidad, con la defensa de los derechos sociales por encima de los derechos individuales. La imposición del modelo que promueve el Gobierno afectaría la idea de trabajador e intentaría reemplazarla por la idea de emprendedor. ■

D.H.

MARCELO MINIATI, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN CIMIENTOS

"Vos lo podés lograr"

La fundación Cimientos nace en 1998 con el propósito explícito de remediar el abandono escolar en el nivel secundario y, a diferencia de otras ONG como Educar 2050 y Enseñá por Argentina, cuenta con un referente dispuesto a responder preguntas. "Darles la posibilidad de que terminen la escuela secundaria a chicos de entornos vulnerables se ve como una forma de que salgan de la pobreza", dice Marcelo Miniati, licenciado en Economía con un máster en Negocios y director ejecutivo de la organización.

La labor de la fundación comenzó en Buenos Aires y se expandió a casi todo el país. Hoy, la entidad presidida por Miguel Blaquier tiene presencia en 70 escuelas y asiste a unos 3.000 estudiantes. Futuros Egresados, su programa más importante, consiste en el otorgamiento de becas y el acompañamiento a estudiantes. "Contamos con profesionales que trabajan directamente con los chicos. Este acompañamiento se hace siempre en la escuela y a contratrato. Queremos que toda nuestra tarea apoye a la educación pública, y por eso se hace en el marco de las escuelas." Este acompañamiento no es académico, sino que tiene como objetivo el "desarrollo de habilidades socioemocionales". Explica Miniati: "Muchas veces no hay nadie que les diga a los alumnos 'vos lo podés lograr'. Ahí es donde Cimientos se acerca y trabaja con el chico". La fundación también logró acuerdos con entidades de Colombia y Uruguay para que se aplique su metodología en escuelas de esos países.

El 95% de las instituciones con las que trabaja Cimientos son de gestión estatal. "Cuando un socio dice que va a participar del programa de becas donando fondos, generalmente quiere hacerlo en alguna escuela cercana a su planta, su fábrica o su empresa", explica Miniati. Luego deben gestionarse los permisos para ingresar a las escuelas en cada jurisdicción. Según el director ejecutivo, la intervención "siempre se hace de acuerdo con los lineamientos del Ministerio".

Cimientos cuenta con el apoyo económico de empresas importan-

tes, muchas de ellas multinacionales: HSBC, Coca-Cola, Galicia, Axion, Alba, Techint, Ledesma, Santillana, entre tantas otras. De acuerdo con Miniati, las motivaciones de las corporaciones para colaborar con la fundación estarían ligadas al acuerdo con la misión planteada: "Intentamos resolver el problema de la pobreza a través de la educación; para nosotros, el desarrollo va a venir a través de la educación. Precisamente, buscamos acompañar al chico para que termine su secundario, tenga su título, consiga su primer empleo formal o siga una carrera de educación superior. Las empresas lo ven como una inversión en el futuro del país, una inversión de largo plazo, y por eso nos acompañan".

En 2017, Cimientos también recibió 5.014.052 pesos del Estado nacional para asesorar funcionarios provinciales en el desarrollo del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares. "Consistía –relata Miniati– en coordinar entre el Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios provinciales el desarrollo de programas de tutoría para el nivel secundario. Se trabajó todo el año en seis provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Buenos Aires." Para Miniati, no existe el riesgo de que los privados orienten la educación pública hacia intereses particulares: "Entiendo y creo que el Estado es el responsable de la educación. Cimientos trabaja en conjunto con la escuela pública. Creemos que hoy más que nunca tienen que estar todos los actores trabajando en el mismo sentido: familia, escuela, gobierno y también las empresas. Es muy bueno que una empresa se acerque a la escuela, pueda contarles a los chicos qué posibilidades hay de distintos empleos, que pueda hacer un taller de armado de un currículum y aportar conocimiento". Y concluye: "No creo que haya una pelea entre lo público y lo privado. Lograr que estos chicos tengan un futuro mejor es una tarea de todos". ■

D.H.

UNIPE Editorial Universitaria se propone construir un catálogo sustancioso para la formación integral de docentes, investigadores y lectores interesados en problemáticas actuales e históricas del campo educativo en particular y de las ciencias y las humanidades en general.

 Universidad Pedagógica Nacional

www.editorial.unipe.edu.ar

 unipe EDITORIAL UNIVERSITARIA

Staff

UNIPE: Universidad Pedagógica Nacional

Rector
Adrián Cannellotto

Vicerrector
Carlos G.A. Rodríguez

Editorial Universitaria

Directora editorial
María Teresa D' Meza

Editor de La educación en debate
Diego Rosemberg

Redactor
Diego Herrera